

Los días oscuros

THE DAILY CALLER

La crisis venezolana es una espiral que afecta profundamente la vida de todos. Para el Gobierno se trata de un “ataque extranjero” y no están dispuestos, de ninguna manera, a ceder espacios. Mientras tanto, Juan Guaidó sigue con su ruta y se ha convertido en un actor clave que le entorpece el juego a Maduro

Desde el jueves 7 de marzo el país cayó en la oscuridad absoluta, un apagón eléctrico que se extendió por más de cien horas sumió al país en una crisis sin precedentes. La falta de energía eléctrica agarró desprevenidos a todos. Al inicio de ese jueves de marzo poco se podía prever la magnitud de lo que vendría, mucho menos que se pasarían al menos tres días más hasta ver restituido, parcialmente, el servicio eléctrico. El Gobierno venezolano utilizó el “mega apagón” como una oportunidad más para construir un guion ya repetido; este es, que el apagón se trató de un “saboteo” cometido por la “derecha” bajo la modalidad de una “guerra cibernética” dirigida desde los Estados Unidos, y con participación de Juan Guaidó.

La postura adoptada por Maduro y los ministros ha sido la repetición de un discurso donde el Gobierno elude su responsabilidad y descarga en otros la

culpabilidad de lo que pasa. Ya no hay argumentos, ya no hay contenido. Las palabras de los voceros oficiales solamente hablan de una lucha agonal, de buenos y malos, de ataques y contraataques, de una guerra inminente, y llaman al pueblo a mantenerse firmes, leales, o como insistentemente hicieron por redes sociales y medios de comunicación, a estar en “amor y resistencia”. Por su parte, para los grupos opositores no existió tal ataque cibernético, el apagón es el reflejo de una crisis que tiene años gestándose debido a las faltas de mantenimiento e inversión de toda la red eléctrica del país; en ello también coinciden expertos que han sostenido que la falla se debió a un incendio en la maleza que sobrecalentó el sistema de transmisión haciendo que las centrales de Macagua, Caruachi y Guri dejaran de trabajar.

La versión más sustentable es la que manejó la oposición y los

diferentes expertos del tema. Las excusas del Gobierno no son capaces de tapar la realidad del colapso de los servicios públicos y mucho menos de atender la contingencia con la diligencia que ameritaba. De hecho, vale recordar que todas las centrales eléctricas del país están custodiadas por las Fuerzas Armadas desde hace años, por lo que es inconsistente la lógica gubernamental de hablar de un saboteo. ¿Quiénes tienen el control de las instalaciones sino ellos mismos? Así, hay cosas que no terminan de encajar, por eso no es arriesgada la aseveración que hizo Juan Guaidó cuando sentenció que Maduro “comanda un régimen sádico que llevó a Venezuela a la miseria”.

Entre tanto, la población tuvo que sobrevivir durante los días del apagón. Todos los servicios públicos se vieron paralizados. Los hospitales públicos no contaban con el respaldo eléctrico necesario para operar en sus mínimos; el servicio de Internet fue inexistente; las operadoras de telefonía fija y móvil tuvieron cortes; la escasez de agua, ya constante en muchas zonas, se agravó con la paralización de las plantas distribuidoras; los problemas de las comunicaciones incidieron en el sistema de compras electrónicas –pocos puntos de venta funcionaban y en muchos lugares solo se podía adquirir con efectivo e incluso en dólares–; las estaciones de servicio cerradas en su mayoría, mientras que las clases y las actividades laborales fueron suspendidas; los aeropuertos prestaban servicios a medias y el comercio en general se vio mermado, con énfasis en los dedicados a la venta de alimentos perecederos que, en muchos casos, no tenían como conservar la mercancía viéndose obligados a vender a precios por debajo de su costo, o a que se perdieran.

Fue una tragedia nacional que cobró la vida de al menos veinte personas y puso en riesgo la vida de cientos de pacientes co-

mo, por ejemplo, aquellos que esperaban ser dializados, o las madres embarazadas. También se presentaron hechos de violencia y saqueos en diversas zonas del país. Tal vez los actos de violencia más renombrados ocurrieron en la ciudad de Maracaibo. La Cámara de Comercio del estado Zulia estima que al menos quinientos negocios fueron saqueados: zapaterías, tiendas de electrodomésticos, de ropa, licorerías y de alimentos, además de un hotel y cuatro instalaciones de la empresa Polar. Por su parte, Fedecámaras reporta que fueron saqueados veintidós supermercados, más de veinte farmacias, varios centros comerciales, entre ellos el c.c. La Chinita y el emblemático c.c. Sambil. Los daños a nivel regional y nacional son auténticos, pese a que el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, aseguró a 72 horas de haberse iniciado el apagón que “afortunadamente no hay nada de importancia que reportar al país”.

Luego de registrado el mega apagón y la restitución del servicio eléctrico, el país volvió a experimentar un nuevo apagón que afectó a casi todos los estados y se mantuvo en algunos lugares por más de cien horas. Para el Gobierno nacional este segundo apagón es parte del mismo saboteo, mientras que para la oposición es el reflejo del deterioro continuado del sistema

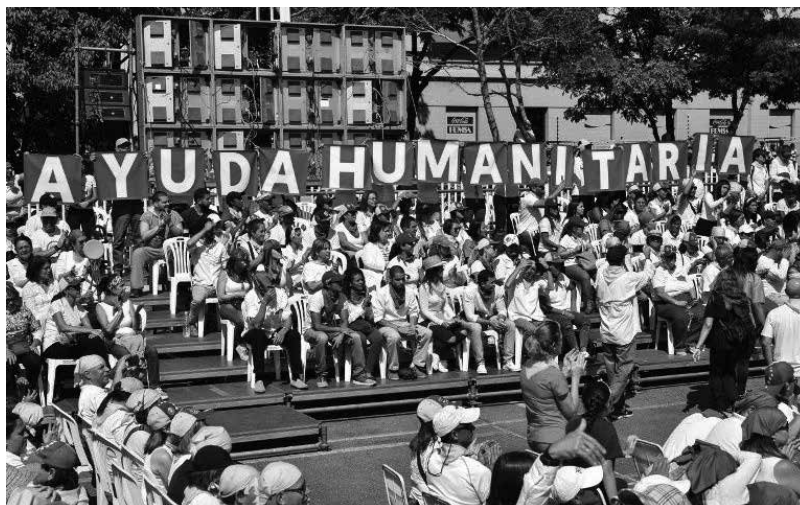
eléctrico nacional. Lo cierto es que Maduro aprobó un plan de *Administración de Cargas*, por al menos treinta días, con el objetivo de restituir progresivamente el sistema eléctrico nacional; ello supone la suspensión del servicio eléctrico por zonas y un número de horas determinadas cada día, quedando fuera de esta regulación la ciudad de Caracas y el estado Vargas.

APAGÓN EDUCATIVO

El mes de marzo será inolvidable para los alumnos, padres y maestros del país, ya que solamente se han impartido ocho días de clases –menos de la mitad de los días programados–, todo ello motivado por la crisis del sistema eléctrico nacional. Como era de esperarse, hasta los momentos no ha existido un pronunciamiento oficial que presente un plan de recuperación de clases.

TENSIONES FRONTERIZAS Y AYUDA HUMANITARIA

Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, señaló que el 23 de febrero iba a ser el día estipulado para que ingresara la ayuda humanitaria procedente de diversos países, y que respondía a una solicitud que previamente había realizado la Asamblea Nacional a la ONU, para atender la crisis de alimenta-



PANORAMA

ción y salud. Llegado el día 23, la ayuda humanitaria no pudo entrar al país pese a las reiteradas llamadas que realizó Guaidó a las Fuerzas Armadas para que no bloquearan el paso y se colocaran “del lado de la Constitución”. Ese 23 se presentaron enfrentamientos en la zona fronteriza con Colombia, luego que camiones con ayuda humanitaria y escoltados por varias personas salieran de Cúcuta, pero se encontraron con el bloqueo en la parte de Venezuela. No obstante, luego de las tensiones que se suscitaron en el mes de febrero, la Federación Internacional de la Cruz Roja logró consensuar con el Gobierno y con la oposición el ingreso de la ayuda humanitaria, siguiendo sus procedimientos y respetando los principios de independencia, imparcialidad y humanidad.

PERSECUCIÓN Y ASESINATOS

En la población de Santa Elena de Uairén, estado Bolívar, todo estaba listo por parte de los grupos opositores para acompañar la entrada de la ayuda humanitaria procedente de Brasil. Pero el 23 de febrero fue un día trágico para el pueblo pemón, cuando en el forcejeo por el ingreso de la ayuda humanitaria, el Ejército venezolano abrió fuego contra los manifestantes. El saldo ha sido una tragedia. Según el diputado de la Asamblea Nacional y cacique indígena Romel Guzamana, 25 indígenas pemones fueron “acribillados” por el régimen de Maduro. Declaró, además, que aquel día:

[...] contamos más de sesenta autobuses y dieciséis vehículos rústicos desde los cuales se disparaba a las personas que se encontraban en la plaza de Santa Elena, en las cuatro esquinas, obligándonos a huir hacia las montañas. Había un estado de caos y anarquía. Logramos llegar al hospital de Santa Elena, el cual se desbordó por la llegada de heridos y muertos.

A raíz de estos hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado venezolano que adopte las medidas necesarias para proteger y garantizar la vida y seguridad de los indígenas pemones y se abstenga del uso de la fuerza.

MISIÓN DE LA ONU

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estuvo en Venezuela para verificar la situación de los DD.HH. Por ello se reunieron con diferentes actores de la sociedad civil, partidos políticos y funcionarios del gobierno. Pudieron visitar, además, hospitales, centros educativos y comunidades. Durante un discurso en el Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la organización, pidió a las autoridades venezolanas tomar “todas las medidas para demostrar su compromiso real de abordar los numerosos problemas difíciles que se informan en todo el país”. En relación a estos problemas resalta el tema de la salud, la crisis del sistema educativo y de servicios públicos, así como el éxodo masivo.

AMEDRENTAR PARA DESINFORMAR

El gobierno de Maduro escala en su violencia en contra de los comunicadores sociales. Según datos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en lo que va de año se contabilizan alrededor de cuarenta detenciones arbitrarias

a comunicadores, a quienes les realizaron interrogatorios “en condición de aislamiento o incomunicación”. Igualmente, otros casos son el reflejo de la impunidad que sufren los periodistas en Venezuela y la aquiescencia del Gobierno, cuando los periodistas son hostigados por policías y colectivos paramilitares mientras realizan su trabajo. Otra de las estrategias más comunes del poder es señalar en sus medios, con nombres e imágenes, a periodistas y activistas de derechos humanos, incitando a la persecución, el odio, y poniendo en riesgo la vida de los trabajadores de la comunicación. Se han documentado varios casos; entre los más sonados podemos citar la detención durante veinticinco horas del periodista y defensor de derechos humanos Luis Carlos Díaz; la dura golpiza y posterior amenaza al periodista polaco Tomasz Surdel a manos de las fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES); la detención de Cody Weddle por agentes de Contrainteligencia Militar, interrogado durante doce horas y finalmente deportado. Igualmente sucedió con el periodista Jorge Ramos, de la cadena de noticias *Univisión*, cuando en plena entrevista a Maduro, este decide suspender la misma y retener a Ramos y todo su equipo por aproximadamente dos horas dentro del Palacio de Miraflores, y posteriormente expulsarlos del país.

AL CIERRE

Al cierre de esta edición, el presidente encargado, Juan Guaidó, ha convocado a manifestaciones por todo el territorio nacional para el 1ero de Mayo. Por otro lado, el alcalde Emilio González del municipio Gran Sabana, en el estado Bolívar, fue despojado de su cargo por el gobernador de la entidad Justo Noguera, luego que “cuadri-llas de paz” tomaran las instalaciones de la alcaldía.



EL CARABOBOÑO